

bajal; lo pedido por el representante del ministerio público y demas constancias de autos á que en lo necesario me refiero, y resultando de ellas probada la violacion de la garantía consignada en el artículo quinto constitucional que invoca; pues el acto de que se queja fué ejecutado en el mes de Abril último, en cuya fecha estaban ya los ciudadanos todos en el goce de las concedidas en la Constitucion general de la República Mexicana; de conformidad con lo pedido por el Promotor, debia declarar y declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege á Julian Avendaño contra la determinacion que dió origen á este recurso. Hágase saber y publicada la sentencia, remítanse las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. El C. Juez de Distrito lo mandó y firmó.—*José A. Bucheli.*—*F. de A. Osorno*, secretario.

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 23 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado primero de Distrito de esta Ciudad por Julian Avendaño, contra el Comandante militar de esta Ciudad que lo consignó al servicio militar en el escuadron núm. 11 en el mes de Abril último, en cuya época no han estado suspensas las garantías individuales á que se refiere el artículo quinto de la Constitucion federal, de lo que resulta, que esas garantías se han vulnerado en la persona del quejoso, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 16 del próximo pasado, por el Juez primero de Distrito de esta Ciudad que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Julian Avendaño, contra la determinacion que dió origen á este recurso.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que procedan, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Aza.*—*Simon Juzman.*—*Luis Vellasquez.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 3 de 1873.—*Lic. Enrique Landá*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Chihuahua contra el C. Buenaventura Gendurillas, Jefe de Hacienda de ese Estado y otras personas, por sospechas de soborno.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: que tomada á los presuntos reos su confesion con cargos, en la que se les formuló el que les resulta de sus propias declaraciones, en que aparece, que intentaron conseguir del C. Jefe de Hacienda del Estado, una rebaja de los derechos impuestos por el arancel vigente á las mercancías que se importen por las Aduanas marítimas y fronterizas, mediante una cantidad que ofrecieron darle de gratificacion; y habiendo contestado que nunca fué su monte cohechar ó sobornar á dicho empleado, en razon á que la suma que ofrecian

no era para gratificar, sino como un aumento á la tercera parte de los derechos; toca al que suscribe presentar la acusacion en forma, á cuyo efecto se le ha pasado en traslado esta causa.

El que firma, está en la creencia, de que el Ministerio fiscal, como enteramente de buena fé, no debe siempre concluir sus pedimentos de un modo adverso al acusado, sino ligarse en lo absoluto á las constancias del proceso, y deducir sus conclusiones en el sentido que fuere de justicia. Con esta conviccion, nacida de la ley y de la institucion del Ministerio público, sostiene el que suscribe, que los datos que ha tenido el Juzgado, aunque han sido bastantes para animar este proceso, y para llevarlo hasta su fin, son del todo insuficientes para fundar una sentencia condenatoria: pasa á demostrarlo:

Los que hayan presenciado la crisis que ha atravesado el Estado desde Octubre del año anterior, en que estallaron los movimientos revolucionarios de Durango y Monterrey, no podrán menos que confesar que se han hecho inauditos esfuerzos para que Chihuahua secunde tales movimientos, y que debido al buen sentido y carácter sumiso de sus hijos, ha conservado su respeto y obediencia á las autoridades legítimamente constituidas. Esos esfuerzos, aunque se han estrellado ante el recto juicio de la poblacion, han producido consecuencias por desgracia demasiado graves, infundiendo desconfianza y hasta aborrecimiento del Supremo Gobierno de la Nacion. Una de las circunstancias que se han explotado con mayor empeño, es la rebaja de los derechos de importacion en las Aduanas fronterizas de Ojinaga y Paso del Norte, que por muchos años estuvieron concediendo los administradores, y que hoy se ha negado por órdenes expresas del Gobierno general, sobre quien se ha hecho pesar de una manera injustificable, la crisis actual, poniéndolo en conflicto con el del Estado. Esto ha dado lugar á varias emergencias, siendo la

TOMO IV.—PARTE II.

presente causa una de ellas; pues aunque se trata de un hecho acaecido en los primeros dias de Enero, el proceso no comenzó hasta 11 de Mayo, es decir tres despues del en que se recibió en esta Ciudad por extraordinario la resolucion del C. Presidente de la República, fecha 11 de Febrero último, en la que se desapruaba la rebaja de los derechos acordada por el Ejecutivo del Estado en virtud de facultades extraordinarias.

Los comerciantes importadores á quienes mas afectaba tal resolucion, queriendo perder al empleado que habia velado por los intereses federales, no tuvieron inconveniente para acusarlo de un delito muy difícil de probar: y sin comprender que la acusacion pesaba mas directamente sobre ellos, y que su dicho podria perjudicarlos, han puesto su conducta en tela de juicio. El resultado ya lo están palpando: El C. Jefe de Hacienda quedó enteramente libre de la acusacion, tanto por la resolucion citada en que el Supremo Gobierno aprueba y clogia sus actos oficiales, como por el auto de sobreseimiento pronunciado por el Juzgado de Distrito en 20 de Abril último; y los comerciantes reportan todavia las consecuencias de sus propias confesiones.

Se infiere de aquí, que el origen de este proceso no ha sido tan legítimo que con solo seguirlo hubiera una presuncion en contra de los acusados; se ha dado mas oído á la pasion que á la verdad; y queriéndose alcanzar un fin propuesto, poco se ha reflexionado en los medios. Se infiere tambien que la existencia del cuerpo del delito es completamente dudosa, atendiendo á que los datos que la comprueban, no son otros que el dicho de los que aparecen como delincuentes, y aun entre ellos, hay las mas notorias contradicciones que vienen á desvirtuar la fuerza probatoria que tendrian si estuvieren contestes.

Efectivamente, en las declaraciones de D. Nestor Armijo, D. Enrique Gosch, D. Federico Wulff, D. Pedro Mignagoren y D.

Víctor Irigoity, rendidas ante el Juzgado primero de letras de esta Capital, no se dice una palabra de cohecho ó soborno, y solo en la del último se habla de gratificación. Así es que la cantidad que ofrecían al C. Gefe de Hacienda bien pudo entenderse que era un aumento á la tercera parte de los derechos, particularmente despues que se ha depurado la averiguacion, y todos al ampliar esas declaraciones, se han expresado en este sentido, ó al menos, que no se fijaron en que el empleado se apropiara aquella suma ó que le diera entrada en los libros de su oficina. Se corrobora mas este acerto, atendiendo á que desde la promulgacion del Arancel de 31 de Enero de 1856, hasta á fines del año próximo pasado, como es público y notorio, las importaciones de mercancías por las aduanas fronterizas de Ojinaga y Paso del Norte, se hacian por medio de *ajustes* con los administradores, quienes rebajaban los derechos casi á su arbitrio, y cobraban por lo regular la tercera parte. Siendo esto así, y cuando el comercio estaba acostumbrado á entrar en esos arreglos, es natural suponer que con la misma intencion ofreciera pagar mayor cantidad al C. Gefe de Hacienda. Es doctrina universalmente reconocida entre los prácticos, que lo que constituye la base fundamental de todo proceso, es la justificacion plena del cuerpo del delito, sin cuyo requisito es injusta la imposicion de pena. En el presente caso, no hay esa justificacion, porque conforme á la ley 18 tít. 16 partida tercera, los interesados no pueden declarar en su propia causa, ni vale su dicho; y segun la cuarta tít. 13 de la misma partida, la confesion en materia criminal no puede hacer prueba plena sino está administrada con otras. No habiendo en todo el proceso mas justificaciones que las declaraciones de los que han sido procesados, es evidente que conforme á las leyes citadas, no existe la plena comprobacion del cuerpo del delito.

Se dirá tal vez que estando de acuerdo la declaracion del C. B. Gandarillas, con lo

de D. Nestor Armijo, en punto al ofrecimiento de la cantidad, es necesario y legal tener como probado ese hecho; pero á la simple lectura de dicha declaracion se comprende, que el C. Gefe de Hacienda, tenia perfecto conocimiento de la acusacion que habian hecho en su contra los comerciantes; sabia que habian confesado que tuvieron la intencion de cohecharlo, y así pudo preparar su declaracion en la que sostiene (fojas 24 línea cuarta), *“que los comerciantes han tenido el cuidado de confesar que quisieron cohechar al que habla (C. Gandarillas), á quien á la verdad le habria sido muy difícil de probar este delito, puesto que la conversacion que tuvo con aquel (Sr. Armijo), fué absolutamente privada y sin testigos.”* Sabiendo pues el C. Gandarillas, que sus contendientes habian confesado una falta, es natural que se conformara con tal confesion, y procurara que los que la habian vertido, sufrieran sus consecuencias; quedando así explicado el acuerdo de ambas declaraciones. Pero supongamos por un momento comprobado plenamente el cuerpo del delito y veamos si es posible la imposicion de alguna pena á los presuntos reos, conforme á las leyes vigentes.

El cohecho ó soborno, es la seducccion ó corrupcion del Juez á otra persona para que haga lo que se le pide aunque sea contra justicia. Diccionarios de legislacion y del idioma Español, palabras citadas. Para que pueda cometerse este delito, es necesario, segun la definicion, que se trate de un punto sujeto á la jurisdiccion del Juez, ó que esté en las facultades de la persona á quien se quiere seducir, ó lo que es lo mismo, no habrá delito de cohecho ó soborno, cuando aquello que se pide está fuera de las atribuciones del funcionario á quien se ofrezcan gratificacion ó dádiva por concederlo. Tan cierto es esto, que si al oficial archivero de un tribunal se le promete una cantidad para que el magistrado falle en determinado sentido la causa sometida á su conocimiento, aunque real y positiva-

mento se haya tenido intencion de cometer el delito de cohecho, nadie podrá sostener que se ha perpetrado; puesto que la persona á quien se ofreció, no podría conceder lo que de ella se solicitaba. Si á un individuo que no sepa escribir se le pide falsifique un escrito, aun cuando tenga voluntad de hacerlo, como su intencion no puede pasar del fuero interno, es evidente que no debe castigársele como falsificador.

Ahora bien: suprimidas como lo fueron por decreto de 10 de Octubre de 1855, las gefaturas superiores, que ejercian algunas atribuciones aunque limitadas sobre las aduanas marítimas y fronterizas; quedando en su lugar las oficinas de hacienda que hoy existen, sin mas facultades que las que les da la ley de 19 de Febrero de 1855, segun es de verse en el nuevo Código de la reforma tomo segundo, parte primera, página 128 y en cuyas facultades no se encuentra la de intervenir en las importaciones de mercancías que se hagan por las repetidas aduanas, que dependen directamente del ministerio de hacienda, sin sujecion á los gefes del ramo en los Estados; es incontestable que el cohecho ó soborno que intentaron cometer los comerciantes de esta Ciudad á quienes se procesa, no podía pasar de la esfera de mera tentativa que no merece pena, puesto que lo que trataban de conseguir no estaba en las facultades del C. Gandarillas; y si este hubiera dado la orden para que las aduanas fronterizas de Ojinaga y Paso del Norte, permitieran las importaciones por la tercera parte, no habria producido otro resultado que poner en evidencia la conducta del empleado que se habia atrevido á expedirla. Por esta razon sin duda, el Supremo Gobierno de la Nacion, á quien se dió cuenta con fecha 4 de Enero último (fojas 25 y 26) del incidente que tuvo lugar entre el C. Gefe de Hacienda y D. Nestor Armijo, no lo consignó al Juzgado de Distrito, ni ordenó que se levantara la correspondiente averiguacion.

Por otra parte, la ley octava tít. primero

lib. 11 de la Novísima Recopilacion declara, *"que el que viniere á descubrir y decir el don que así diere y hubiere dado á los dichos Jueces, que no haya pena por lo que le dió, magüer que por derecho la merezca."* Siendo aplicables respectivamente las penas á que están sujetos los Jueces y Magistrados, por esta clase de responsabilidades, á los empleados á quienes se procese por las mismas faltas, debe hacerse extensiva igualmente la prerogativa de la ley recopilada. (El nuevo Código de la reforma, tomo segundo, parte segunda, página 488) Si pues D. Nestor Armijo, D. Enrique Gosch, D. Pedro Miguagoren y D. Victor Irigoity, han descubierto á la autoridad su tentativa de cohecho ó soborno, con este solo hecho, han quedado libres de toda pena, aunque por derecho la merecieran.

Ademas, si el principal ofendido que es el C. Gefe de Hacienda, á quien se acusó de un delito infamante, se ha desistido en toda forma de la accion que pudiera corresponderle para exigir una reparacion y ha perdonado la injuria personalmente y por conducto de su apoderado D. Rafael Aldrete, segun consta de las diligencias de fojas 58 y 60 vuelta, con mayoria de razon debe decretarse la absolucion de los procesados.

Por último, las dos terceras partes de derechos de importacion que el erario federal dejó de percibir, como aparece de la causa y es de pública notoriedad, no fueron rebajadas en virtud del arreglo que los comerciantes pretendieron tener con el C. Gefe de Hacienda, sino por órdenes terminantes del Ejecutivo del Estado, investido de facultades extraordinarias; y no habiéndose aprobado esas órdenes, dicho Gefe ha estado exigiendo el pago de las cantidades adeudadas, y aun ha hecho uso de la facultad económico-coactiva, conforme á las leyes de 20 de Enero de 1837, 20 de Noviembre de 1838 y de 11 de Diciembre de 1871.

Por lo expuesto, y con fundamento de las disposiciones y doctrinas citadas, así como de la ley 26, tít. primero part. sétima, el Mi-

nisterio fiscal concluye pidiendo con las proposiciones siguientes. Primera: se absuelve á D. Nestor Armijo, D. Enrique Gosch, D. Pedro Mignagoren y D. Victor Irigoity, del cargo que se les ha formulado. Segunda: la causa continuará contra Don Federico Wulff, lograda que sea su comparecencia. Tercera: quedan á salvo los derechos de la Hacienda pública, para el cobro de los derechos que ha dejado de percibir, como está mandado en la sentencia interlocutoria de 20 de Abril próximo pasado; y cuarta: Notifíquese, y remítase al superior para su revision.

Chihuahua, Junio 25 de 1872.—*Lic. Jose M. Ramos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

Chihuahua, Junio 28 de 1872.—Vista esta causa instruida en este Juzgado contra el Gefe superior de Hacienda, C. Buena-ventura Gandarillas, y los comerciantes D. Nestor Armijo, D. Enrique Gosch, D. Pedro Mignagoren, D. Victor Irigoity, D. Federico Wulff y D. Jacobo Amberg, en virtud de las comunicaciones del C. Gobernador y Comandante militar del Estado, dirigidas al Juez primero de letras de esta Ciudad, con fecha 26 de Febrero último, y al Juzgado de Distrito con fecha 11 de Marzo próximo pasado, por considerarse que el C. Gandarillas admitió la suma de cinco mil pesos para conceder una rebaja de dos terceras partes de los derechos prevenidos en el arancel vigente de 31 de Enero de 1857, y que los comerciantes arriba citados, procuran cohechar á aquel. Vistas las declaraciones tomadas en el Juzgado de letras que se registran en la foja 2 á la octava inclusive. La respuesta fiscal de fojas 10 y 11; el dictámen del asesor voluntario, de la foja 16; las ratificaciones, ampliaciones y confesiones de los acusados; el pedimento fiscal de 25 del corriente; la defensa de los reos y cuantas constancias del proceso se ha

creído deber tener presente. Considerando: que no está plena y legalmente probada la existencia del delito que se persigue; que dicha comprobacion es un requisito esencialmente necesario para imponer pena; que en la presente causa, la Hacienda pública federal no ha deducido las acciones que puedan competirle para cobrar las dos terceras partes de los derechos á que se refiere el C. Promotor fiscal, en la fracion tercera de las conclusiones del pedimento de 25 del corriente, y de que tambien hace mérito el defensor de los acusados en el penúltimo parrafo de su escrito de defensa, ni los causantes de esos derechos han opuesto sus excepciones. Con fundamento de las leyes y doctrinas en que el Ministerio público apoya su última respuesta ya citada de 25 del presente mes, se falla con las proposiciones siguientes:

1ª: Se absuelve á los Sres. D. Nestor Armijo, D. Enrique Gosch, D. Pedro Mignagoren y D. Victor Irigoity, del cargo que se les formuló.

2ª: Sáquense los testimonios en lo conducente, de esta causa, para continuaria contra D. Federico Wulff, lograda que sea su comparecencia.

3ª: Se declara que este fallo en nada perjudica las acciones que la Hacienda pública federal, pueda tener con los expresados D. Néstor Armijo, D. Enrique Gosch, D. Pedro Mignagoren, D. Victor Irigoity, D. Federico Wulff y D. Jacobo Amberg, por derechos causados, ni á las excepciones y defensas que dichos Sres. puedan oponer, por no haberse ventilado estos puntos en la presente causa.

4ª: Notifíquese este fallo á los interesados, y remítase la presente causa al superior para su revision.

El C. Juez definitivamente juzgando en audiencia pública de este día, así lo decretó y firmó por ante mí de que Doy fé.—*Lic. José Hierro.*—*A. El. Perez.*

Pedimento fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Magistrado de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que examinada esta causa escrupulosamente, que al principio presentaba un aspecto muy grave, se advierte que rectificados ó explicados los hechos en la prosecucion de la misma, casi ha desaparecido esa gravedad. Respecto del Gefe de hacienda de Chihuahua, absolutamente falta comprobacion del cuerpo del delito de cohecho, con que se le indicaba por las declaraciones de los comerciantes extranjeros, examinados de la foja 2 á la 8, principalmente por la del llamado Nestor Armijo. Ellos ministraban datos para que se les reputase reos del delito imputado al Gefe de hacienda, sin que por eso hubiese mérito para reputar á esos delinquentes; y si bien, por esas mismas declaraciones merecieron ser tratados como reos, no llegó á haber en el curso del proceso las pruebas bastantes para la confirmacion de aquel concepto, segun funda muy bien el C. Promotor fiscal del Juzgado de Chihuahua. Convencido pues, el que suscribe, de la legalidad y solidez de los fundamentos de aquel pedimento, y de la sentencia dictada de conformidad, pide á vd. se sirva declarar que en la revision de dicho fallo, nada se ha encontrado que sea opuesto á las leyes, ni al interes de la hacienda pública.

Durango, Febrero 22 de 1873.—*José María Hernandez.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico por llevar la voz fiscal como Gefe de Hacienda por falta absoluta del propietario. Durango, Mayo 14 de 1873.—*Loaeza.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Durango, Abril 19 de 1873.—Vista la causa instruida contra el Ciudadano Gefe de Hacienda de Chihuahua, Buenaventura

Gandarillas, por el ofrecimiento que algunos comerciantes de aquella plaza le hicieron de la cantidad de cinco mil pesos, cuyo proceso en su principio, ofrecía un aspecto de suma gravedad, con motivo de haberse presumido que la oferta de dicha suma pudiera tener el carácter de un soborno, para que el expresado funcionario, autorizara la importacion de mercancías por la Aduana Fronteriza de Ojinaga y Paso del Norte habiéndose posteriormente desvirtuado con la secuela de las actuaciones, las circunstancias que se habian presentado como cuerpo de delito, que al fin no se comprobó, pues ni el Gefe de Hacienda aceptó los ofrecimientos que se le hicieron, ni tampoco llegó á justificarse de una manera clara, que los comerciantes autores de ellos, D. Nestor Armijo, D. Enrique Gosch, D. Pedro Mignagoren y D. Victor Irigoity tuvieran una marcada intencion de cohecharlo; visto el auto de sobreseimiento pronunciado en 20 de Abril de 1872, por el Juez de Distrito de Chihuahua, respecto del C. Buenaventura Gandarillas, mandando continuar la causa en cuanto á los extranjeros mencionados, mas, contra el ausente D. Federico Wulff: vista así misma la sentencia del mismo Juez dictada en 28 de Junio de dicho año, absolviendo del cargo á Armijo, Gosch, Mignagoren é Irigoity, disponiendo que se continué respecto de Wulff cuando se logre su comparecencia; el Magistrado del Tribunal de Circuito, de conformidad con el pedimento del C. Promotor fiscal, considerando los fundamentos que tuvo el Juez de Distrito de Chihuahua, juzgando definitivamente, ha tenido á bien sentenciar: Primero: se dá por revisado el auto de sobreseimiento de 20 de Abril de 1872. Segundo: se confirma la sentencia absolutoria pronunciada en 28 de Junio del mismo año. Tercero: quedan á salvo, como se dispone en dicha sentencia del inferior, los derechos del fisco federal para recobrar lo que haya dejado de percibir por la importacion de los efectos pertenecientes á los comerciantes procesados, conforme al

Arancel de Aduanas Marítimas y Fronterizas, vigente en la época de la misma importación. Cuarto: sáquese testimonio de esta sentencia y del pedimento fiscal relativo, y remítanse ambas piezas á la secretaria de la Suprema Corte de Justicia, para el Semanario Judicial.

Así fué acordado por ante mí de que certifico.—*Benigno Silva*.—una rúbrica.—*Juan Rivas*, secretario.—una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, 14 de Mayo de 1873.—*Juan Rivas*, secretario.

Pedimento del Procurador General de la Nación.

El Procurador General de la Nación dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Chihuahua se practicó una averiguación por sospechas de soborno, contra el C. Buenaventura Gandarillas, Jefe superior de Hacienda de dicho Estado y otras personas. El resultado de esa averiguación fué, que ningunos datos aparecieron en contra del acusado, por cuyo motivo el Juez dictó, con fecha 20 de Abril de 1872, un auto de sobreseimiento respecto de Gandarillas, y mandó que la causa continuase contra los comerciantes D. Nestor Armijo, D. Enrique Gosh, D. Pedro Mignagoren, D. Victor Irigoity y el ausente D. Federico Wulff. Continuó en efecto hasta ponerse en estado de sentencia, y en ella absolvió el Juez á los cuatro primeros, mandando respecto del último continuarla cuando se lograra su comparecencia. En la misma sentencia, ratificóla de 20 de Abril en la parte en que dejaba á salvo los derechos de la Hacienda pública para cobrar los derechos que habia dejado de percibir.

El Tribunal de Circuito de Durango conociendo en revision, confirmó en todas sus partes tanto el auto de sobreseimiento como la sentencia absolutoria, los cuales por lo mismo han causado ejecutoria.

El Procurador General no encuentra vicio

de sustanciación en todo el proceso; y por tal motivo pide se le por revisada.

México, Junio 11 de 1873.—*L. Guzman*.

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 13 de 1873.—Por revisada y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José M. Iglesias*.—*Pedro Oyazon*.—*M. Ansa*.—*S. Guzman*.—*Ignacio Ramirez*.—*Indis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Junio 26 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por el C. Victoriano Corona, contra su consignación al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que el C. Victoriano Corona, interpone recurso de amparo contra la Comandancia militar, que lo consignó al servicio de las armas, en Marzo del año anterior, por considerar violada en su persona la garantía que otorga el artículo quinto constitucional; y no obstante no haber rendido informe la Comandancia, apareciendo en el escrito del quejoso, que su consignación tuvo lugar en Marzo de 1872, en cuya fecha se hallaban suspensas las garantías, conforme al decreto de 2 de Diciembre de 1871, es indudable que no se puede otorgar el amparo, fundándose en el decreto de 17 de Mayo de 1872, sin darle á este un efecto retroactivo, y por tanto el amparo no procede.